



MINISTERIO
DEL INTERIOR

SECRETARÍA GENERAL DE
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

TRIBUNAL CUERPO SUPERIOR DE TÉCNICOS
DE IIPP, PROMOCION INTERNA, ESPECIALIDAD
JURISTAS (O. E. P. 2021-2022)

PROCESO SELECTIVO PARA ACCESO, POR EL SISTEMA DE
PROMOCIÓN INTERNA, AL CUERPO SUPERIOR DE TÉCNICOS
DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS, ESPECIALIDAD
JURISTAS (OEP 2021 Y 2022).



PRIMER EJERCICIO: CUESTIONARIO

16/3/2023

NO ABRA EL CUADERNILLO HASTA QUE SE LE INDIQUE

1. Según lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la gestión profesional del directivo público se somete a criterios de:

- a) Eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en función de los objetivos que les hayan sido fijados.
- b) Eficacia y eficiencia, excluyendo toda clase de responsabilidad por su gestión.
- c) Eficacia y responsabilidad sin control de resultados en función de los objetivos que les hayan sido fijados.
- d) Transparencia, responsabilidad, eficiencia y grado de consecución de los objetivos fijados.

2. El artículo 15 de la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, establece sobre el equipo evaluador que:

- a) Se podrán constituir equipos mixtos con las personas responsables de la planificación de la política pública y de la evaluación.
- b) En ningún caso se podrán constituir equipos mixtos con las personas responsables de la planificación de la política pública y de la evaluación.
- c) Con carácter general, la evaluación de políticas públicas se realizará por un equipo evaluador interno del órgano responsable de la política pública a evaluar.
- d) El equipo evaluador podrá garantizar su independencia de criterio, imparcialidad y neutralidad con una declaración responsable conjunta.

3. Según el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de personas con discapacidad y de su inclusión social, el cómputo de la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad, se realizará:

- a) Sobre la plantilla total de la empresa correspondiente, cualquiera que sea el número de centros de trabajo.
- b) Sobre la plantilla de cada uno de los centros de trabajo, que deberán cumplir con la cuota fijada.
- c) Sobre la plantilla total de la empresa correspondiente, cualquiera que sea el número de centros de trabajo. Para el establecimiento de la cuota sólo se computarán los trabajadores vinculados con la empresa por un contrato laboral indefinido.
- d) Para el cómputo no se entenderá que están incluidos los trabajadores con discapacidad que se encuentren prestando servicios en virtud de los contratos de puesta a disposición que las empresas hayan celebrado con empresas de trabajo temporal.

4. De acuerdo con el artículo 22 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, cuando no se pueda dar acceso a la información en el momento de la notificación de la resolución que lo conceda, deberá otorgarse desde la notificación de la resolución un plazo:

- a) No inferior a quince días.
- b) Lo más breve posible.
- c) No superior a diez días.
- d) No inferior a treinta días.

5. El artículo 190 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, recoge sobre los efectos de los contratos, que el órgano de contratación ostenta una de las siguientes prerrogativas, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la propia Ley:

- a) Modificar el contrato por razones de oportunidad de orden público.
- b) Inspeccionar todas las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades.
- c) Determinar los efectos del contrato.
- d) Resolver las dudas que ofrezca el cumplimiento del contrato.

6. El examen y comprobación de la Cuenta General del Estado le corresponde al Tribunal de Cuentas por delegación de:

- a) Las Cortes Generales.
- b) El Ministerio de Hacienda y Función Pública.
- c) El Congreso de los Diputados.
- d) El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

7. Según el artículo 34 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los responsables y encargados de tratamiento:

- a) Cuando estén obligados a designar un delegado de protección de datos, éste tendrá que tener, en cualquier caso, dedicación completa a esta materia.
- b) No están obligadas a designar un delegado de protección de datos las empresas de servicios de inversión, reguladas por la legislación del Mercado de Valores.
- c) Comunicarán, a la Agencia Española de Protección de Datos, o a las autoridades autonómicas de protección de datos, las designaciones, nombramientos y ceses de los delegados de protección de datos.
- d) Decidirán si designan o no un delegado de protección de datos en función del volumen de los tratamientos, la categoría especial de los datos tratados o los riesgos para los derechos o libertades de los interesados.

8. De acuerdo con el artículo 131 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, no serán de aplicación las disposiciones de esta Ley relativas a la preparación y adjudicación del contrato:

- a) A los contratos relativos a la prestación de asistencia sanitaria en supuestos de urgencia y con un valor estimado inferior a 30.000 €.
- b) A todos los contratos menores relativos a la prestación de asistencia sanitaria.
- c) A todos los contratos relativos a la prestación de asistencia sanitaria y con un valor estimado inferior a 30.000 €.
- d) A los contratos relativos a la prestación de asistencia sanitaria en supuestos de urgencia y con un valor estimado superior a 30.000 € e inferior a 50.000 €.

9. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, señale el tipo de presupuesto de las Entidades Públicas Empresariales:

- a) Administrativo y de capital.
- b) Estimativo y administrativo.
- c) De explotación y capital.
- d) Administrativo y de explotación.

10. En atención a lo recogido en el artículo 13 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, señale la respuesta correcta en relación al personal directivo:

- a) Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones Públicas, definidas como tales en las normas específicas de cada Administración.
- b) Son nombrados con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera.
- c) El cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la función de confianza o asesoramiento.
- d) Los procedimientos de selección se regirán por los principios de igualdad, mérito, capacidad y celeridad.

11. El Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, recoge en su artículo 10 que las cartas de servicios se actualizan periódicamente:

- a) En función de las circunstancias y, en cualquier caso, al menos cada cuatro años.
- b) En función de las circunstancias y, en cualquier caso, al menos cada tres años.
- c) Con la frecuencia que el Subsecretario de cada departamento determine.
- d) Con la frecuencia que el Subsecretario de cada departamento determine y, en cualquier caso, como máximo, cada dos años.

12. De conformidad con el artículo 59 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, cuando el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal derivada del embarazo, parto o lactancia natural:

- a) Tanto la empleada pública como quienes estén disfrutando de permiso de paternidad tienen derecho a disfrutar de las vacaciones en fecha distinta, únicamente en el año natural al que correspondan.
- b) Tanto la empleada pública como quienes estén disfrutando de permiso de paternidad tienen derecho a disfrutar de las vacaciones en fecha distinta, aunque haya terminado el año natural al que correspondan.
- c) Solo la empleada pública tiene derecho a disfrutar de las vacaciones en fecha distinta, aunque haya terminado el año natural al que correspondan.
- d) Quienes estén disfrutando de permiso de paternidad sólo pueden disfrutar de las vacaciones en el año natural al que corresponda.

13. El artículo 11 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece los principios técnicos a los que deberá adecuarse el Portal de Transparencia, que son:

- a) Accesibilidad, interoperabilidad y reutilización.
- b) Fiabilidad, responsabilidad y recuperación.
- c) Claridad, fiabilidad y reutilización.
- d) Responsabilidad, accesibilidad y recuperación.

14. Señale la respuesta incorrecta. Respecto a lo previsto en el artículo 22 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, respecto a los tratamientos con fines de videovigilancia:

- a) Se podrá llevar a cabo el tratamiento de imágenes a través de sistemas de cámaras o videocámaras con la finalidad de preservar la seguridad de personas y bienes.
- b) Los empleadores podrán tratar las imágenes obtenidas para el ejercicio de las funciones de control sin necesidad de informar a los trabajadores ni a sus representantes.
- c) Los datos serán suprimidos en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones.
- d) Sólo podrán captarse imágenes de la vía pública en la medida en que resulte imprescindible para preservar la seguridad de las personas y bienes.

15. Los contratos celebrados por las Administraciones Públicas para la adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, tendrán la consideración de:

- a) Contratos de servicios.
- b) Contratos de suministros.
- c) Contratos privados de la Administración.
- d) Contratos mixtos.

16. El artículo 20 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, sobre la resolución que concede o deniega el acceso a la información pública, establece que:

- a) En el supuesto de resoluciones que permitan el acceso a la información cuando haya habido oposición de un tercero, se indicará expresamente al interesado que el acceso sólo tendrá lugar cuando el tercero manifieste su consentimiento expreso.
- b) El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo tendrá la consideración de infracción muy grave a los efectos de la aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora.
- c) Cuando la mera indicación de la existencia o no de la información supusiera la vulneración de alguno de los límites al acceso, podrá indicarse esta circunstancia al desestimar la solicitud.
- d) Serán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, las que concedan el acceso parcial o a través de una modalidad distinta a la solicitada y las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero.

17. El artículo 164 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, regula las distintas modalidades de auditoría pública, entre las cuales no se encuentra:

- a) La auditoría operativa.
- b) La auditoría de seguimiento contable.
- c) La auditoría de cumplimiento.
- d) La auditoría de regularidad contable.

18. En los supuestos en que proceda, el órgano de contratación podrá establecer el derecho a revisión periódica y predeterminada de precios. En estos casos, el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público establece que:

- a) La fórmula de revisión de precios aplicable a un contrato podrá variar durante la vigencia del mismo, previa autorización del Consejo de Ministros.
- b) Podrán considerarse revisables todos los costes asociados a un contrato público, previa justificación en el expediente y con autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
- c) La fórmula de revisión de precios aplicable a un contrato podrá detallarse en el pliego de prescripciones técnicas o en el pliego de cláusulas administrativas particulares del mismo.
- d) El órgano de contratación fijará la fórmula de revisión de precios que deba aplicarse, atendiendo a la naturaleza de cada contrato y a la estructura y evolución de los costes de las prestaciones del mismo.

19. Según el artículo 55 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señale la respuesta incorrecta en relación a quiénes tienen la consideración de órganos directivos:

- a) Los Secretarios generales técnicos.
- b) Los Subdirectores generales.
- c) Los Secretarios de Estado.
- d) Los embajadores.

20. El Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, señala en su artículo 19, respecto a los efectos del Programa de quejas y sugerencias, que las quejas:

- a) Podrán condicionar el ejercicio de las restantes acciones o derechos que, de conformidad con la normativa reguladora de cada procedimiento, puedan ejercer aquellos que se consideren interesados en él.
- b) No tendrán, en ningún caso, la calificación de recurso administrativo ni su presentación interrumpirá los plazos establecidos en la normativa vigente.
- c) Tendrán, en todo caso, la calificación de recurso administrativo y su presentación interrumpirá los plazos establecidos en la normativa vigente.
- d) Se registrarán por lo que establezca su normativa de desarrollo en cada departamento.

21. Señale la respuesta incorrecta. De acuerdo con el artículo 41 de La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas con discapacidad, es un órgano consultivo de participación institucional del Sistema para la Autonomía y atención a la Dependencia:

- a) El Comité Consultivo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
- b) El Consejo Estatal de Personas Mayores.
- c) El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.
- d) El Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social.

22. La actuación de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, de acuerdo con el artículo 29 de la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, responderá a uno de los siguientes fines:

- a) Extender la cultura de evaluación en la Administración General del Estado.
- b) Promover la formación en materia de evaluación de políticas públicas.
- c) Participar en la Estrategia para reforzar el sistema público de evaluación.
- d) Promocionar las relaciones institucionales con los sistemas de evaluación de políticas públicas de otras administraciones públicas.

23. Según la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, cuando sea necesaria la publicación de un acto administrativo que contuviese datos personales del afectado y este posea DNI, se identificará al mismo:

- a) Mediante su nombre y apellidos, añadiendo cuatro cifras aleatorias del documento nacional de identidad.
- b) Mediante su nombre y apellidos, añadiendo cinco cifras aleatorias del documento nacional de identidad.
- c) Mediante su nombre y apellidos, junto con el número completo del documento nacional de identidad.
- d) Únicamente con su nombre y apellidos.

24. Según lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en el régimen general de fiscalización e intervención previa no procederá la formulación del reparo cuando:

- a) El gasto se proponga a un órgano que carezca de competencia para su aprobación
- b) El reparo no derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios.
- c) El crédito propuesto no se considere adecuado.
- d) Se aprecien graves irregularidades en la documentación justificativa del reconocimiento de la obligación.

25. De acuerdo con el apartado tercero del artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, no se considerarán poderes adjudicadores, a efectos de esta Ley:

- a) Las Administraciones Públicas.
- b) Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
- c) Las fundaciones privadas, cuando actúen en defensa del interés común
- d) Las asociaciones constituidas por las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

26. El Consejo de Ministros, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado, ¿puede acordar de forma motivada la aplicación del control financiero permanente en sustitución de la función interventora?

- a) Sí, en aquellos tipos de expedientes de ingresos que se determine.
- b) No, no cabe excepción.
- c) Sí, en aquellos tipos de expedientes de gasto y, en su caso, en aquellos órganos y organismos que se determinen.
- d) Sí, solo en los expedientes de ingresos de los organismos autónomos en los que la naturaleza de su actividad lo permita.

27. Señale la respuesta correcta en relación al régimen presupuestario de la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo:

- a) La estructura de su presupuesto corresponde al presupuesto limitativo de las entidades que forman parte del sector público administrativo.
- b) La Entidad anualmente elaborará su anteproyecto de presupuesto y lo remitirá al Ministerio de Interior para su posterior tramitación.
- c) Le corresponde al Ministerio del Interior la elaboración del anteproyecto de presupuesto de la Entidad.
- d) Le corresponde a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias la elaboración del anteproyecto de presupuesto de la Entidad, que será remitido a la Oficina Presupuestaria del Ministerio del Interior para su posterior tramitación.

28. El artículo 13 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, señala que podrán establecer el régimen jurídico específico del personal directivo así como los criterios para determinar su condición:

- a) Los Ministros y los Presidentes de las Comunidades Autónomas.
- b) Las Cortes Generales y los Parlamentos de las Comunidades Autónomas.
- c) El Gobierno y los órganos de gobierno de las comunidades autónomas.
- d) El Ministerio de Hacienda y Función Pública.

29. El Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, sobre el Programa de evaluación de la calidad de las organizaciones, recoge en su artículo 20:

- a) El Gobierno determinará los modelos de gestión de calidad reconocidos conforme a los que se realizará la evaluación de los órganos u organismos de la Administración General del Estado.
- b) No podrá aplicarse ningún modelo preexistente de Programa de evaluación de la calidad de las organizaciones, aunque se estuviera utilizando anteriormente en algún departamento ministerial.
- c) Los modelos de gestión de calidad reconocidos, conforme a los que se realizará la evaluación de los órganos u organismos de la Administración General del Estado, los determinará el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
- d) La evaluación de la calidad de las organizaciones se articulará en tres niveles: autoevaluación, evaluación nacional externa y evaluación supranacional (organismos de la UE).

30. A los efectos del artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se considera acoso por razón de sexo:

- a) Cualquier comportamiento verbal de naturaleza sexual que tenga el propósito de atentar contra la dignidad de la persona.
- b) Cualquier comportamiento físico de naturaleza sexual que tenga el propósito de atentar contra la dignidad de una persona.
- c) Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito de atentar contra la dignidad de una persona.
- d) Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito de atentar contra su dignidad y crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

31. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en su artículo 8, establece la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria que deberán hacer pública las administraciones públicas, entre la que se encuentra la información:

- a) Sobre todos los contratos que se firmen, debiendo publicar la relativa a los contratos menores semestralmente.
- b) Estadística sobre el porcentaje de participación en contratos adjudicados, tanto en relación con su número como en relación con su valor, de la categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes), debiendo publicarse trimestralmente a partir de un año de la publicación de la norma.
- c) Sobre las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma.
- d) Estadística de cada administración pública necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos que sean de su competencia, en los términos que defina en todo caso la Administración General del Estado.

32. Según el artículo 4 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento es:

- a) El corresponsable del tratamiento.
- b) El cesionario de datos.
- c) El encargado de tratamiento.
- d) El Delegado de protección de datos.

33. El título III de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno crea y regula el Consejo de transparencia y Buen Gobierno. Señale la respuesta correcta:

- a) El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estará adscrito al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
- b) El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estará compuesto por los siguientes órganos: La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno y el Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
- c) La condición de miembro de la Comisión del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno exigirá dedicación exclusiva.
- d) El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno será nombrado por un período renovable de cinco años mediante Real Decreto, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional.

34. Según lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la Intervención General de la Administración del Estado elaborará un plan de auditorías:

- a) Semestral.
- b) Anual.
- c) Cuatrimestral.
- d) Bianual.

35. Según lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la auditoría de regularidad contable consiste en:

- a) El examen objetivo de las operaciones y procedimientos de una organización, con el objeto de proporcionar una valoración independiente de su racionalidad económico-financiera.
- b) La revisión y verificación de la información y documentación contable con el objeto de comprobar su adecuación a la normativa contable y en su caso presupuestaria que le sea de aplicación.
- c) La verificación de que los actos, operaciones y procedimientos de gestión económico-financiera se han desarrollado de conformidad con las normas que les son de aplicación.
- d) El examen sistemático de las operaciones de una organización, actividad o función pública, con el objeto de proporcionar una valoración financiera a fin de detectar sus posibles deficiencias y proponer las recomendaciones oportunas.

36. Según el artículo 9 del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen del control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado, el ejercicio de la función interventora comprende:

- a) La intervención de la liquidación del gasto pero no de la inversión.
- b) La fiscalización previa de los actos que desestimen gastos.
- c) La intervención de la inversión pero no de la liquidación del gasto.
- d) La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido económico.

37. El informe final de Evaluación elaborado por el equipo evaluador se publicará, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 de la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado en el plazo de:

- a) Seis meses desde su recepción, en el portal temático de evaluación de políticas públicas.
- b) Tres meses desde su recepción, en el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado.
- c) Dos meses desde su recepción, en el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado.
- d) Un mes desde su recepción, en el portal temático de evaluación de políticas públicas.

38. El artículo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece en relación con la duración de los contratos públicos que:

- a) El contrato podrá prever una o varias prórrogas, que podrán producirse por el consentimiento tácito de las partes.
- b) La prórroga se acordará por el órgano de contratación y en todo caso será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con quince días de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato.
- c) Cuando se produzca demora en la ejecución de la prestación por parte del empresario, el órgano de contratación podrá conceder una ampliación del plazo de ejecución, sin perjuicio de las penalidades que en su caso procedan.
- d) Los contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo máximo de duración de cinco años, excluyendo las posibles prórrogas que en aplicación del apartado segundo del artículo 29 acuerde el órgano de contratación.

39. El número de vocales del Consejo Nacional de la Discapacidad regulado por Real Decreto 1855/2009, de 4 de diciembre, representantes de la asociación de utilidad pública más representativa de ámbito estatal que agrupe a las organizaciones más representativas de los diferentes tipos de discapacidad es:

- a) 18 vocales.
- b) 22 vocales.
- c) 20 vocales
- d) 24 vocales

40. Señale cuál de las siguientes facultades no se integra dentro de la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas:

- a) El examen de la situación y variaciones del patrimonio del Estado.
- b) El control financiero permanente de la Cuenta General del Estado.
- c) El examen de los expedientes sobre créditos extraordinarios.
- d) La comprobación de las Cuentas Generales y parciales de todas las entidades y organismos integrantes del sector público.

41. La privación de la patria potestad conforme previene el artículo 33 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal constituye:

- a) Pena menos grave o leve atendiendo a su duración.
- b) No es pena.
- c) Pena grave.
- d) Pena grave, menos grave o leve atendiendo a su duración.

42. Conforme previene el artículo 155.4 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, la prolongación por más de dos días del permiso extraordinario para el ingreso hospitalario extrapenitenciario de penados clasificados en tercer grado de tratamiento se autoriza por:

- a) El Juez de Vigilancia Penitenciaria.
- b) El Centro Directivo.
- c) La Junta de Tratamiento.
- d) El Juez o Tribunal sentenciador.

43. Según lo dispuesto en el artículo 104 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, cuando sobre un penado clasificado en tercer grado se decreta prisión preventiva:

- a) Se regresa a segundo grado.
- b) Continúa en tercer grado, sin perjuicio de lo que pudiera acordar el Juez de Vigilancia Penitenciaria.
- c) Continúa en tercer grado sin perjuicio de lo que pudiera acordar el Centro Directivo.
- d) Queda sin efecto la clasificación.

44. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, las salidas programadas:

- a) Serán propuestas por la Junta de Tratamiento, aprobadas por el Centro Directivo y autorizadas en todo caso por el Juez de Vigilancia Penitenciaria.
- b) Serán propuestas por la Junta de Tratamiento y aprobadas por el Centro Directivo cualquiera que sea su duración sin necesidad de autorización por el Juez de Vigilancia Penitenciaria.
- c) Serán propuestas por la Junta de Tratamiento, aprobadas por el Centro Directivo y autorizadas por el Juez de Vigilancia en aquellos supuestos en que la salida sea superior a siete días.
- d) Serán propuestas por la Junta de Tratamiento, aprobadas por el Centro Directivo y posteriormente autorizadas por el Juez de Vigilancia en aquellos supuestos en que la salida, por su duración y por el grado de clasificación del interno, sea competencia de este órgano judicial.

45. Conforme al artículo 103 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, la resolución sobre la propuesta de clasificación penitenciaria se dictará:

- a) Por el Centro Directivo en el plazo máximo de un mes desde su recepción.
- b) Por el Centro Directivo en el plazo máximo de dos meses desde su recepción.
- c) Por la Junta de Tratamiento en el plazo máximo de dos meses desde su recepción.
- d) Por el Equipo Técnico en el plazo máximo de dos meses desde su recepción.

46. Conforme establece el artículo 52 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, las normas de régimen interior del Centro Penitenciario:

- a) Se entregarán a los internos a su ingreso en el Centro Penitenciario.
- b) Se publicarán en el tablón de anuncios del Centro Penitenciario para conocimiento general.
- c) Se publicarán en el tablón de anuncios y se comunicarán verbalmente a los internos.
- d) Se entregará a los internos previa petición expresa.

47. Conforme previene el artículo 44 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, las comunicaciones orales pueden ser suspendidas por:

- a) Cualquier funcionario que tenga sospechas fundadas de comisión de un delito.
- b) El Jefe de Servicios.
- c) El Funcionario encargado del servicio.
- d) El Director del Centro Penitenciario a propuesta del funcionario encargado del servicio.

48. Según lo dispuesto en el artículo 16.3 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, el ingreso voluntario en Centro Penitenciario:

- a) No se admitirá si el que pretende ingresar no porta mandamiento judicial de ingreso.
- b) No se admitirá si el que pretende ingresar no presenta testimonio de la sentencia firme condenatoria.
- c) No se admitirá en ningún caso.
- d) Se admitirá al que pretenda ingresar voluntariamente debiendo recabar el Director del Centro en el plazo de 24 horas, mandamiento, testimonio de la sentencia y en su caso de la liquidación de condena.

49. Los Centros Penitenciarios son creados:

- a) Por Orden Ministerial.
- b) Por Real Decreto del Consejo de Ministros.
- c) Por Orden de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
- d) Por Ley ordinaria de las Cortes Generales.

50. De acuerdo con el artículo 86.2 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, el cacheo con desnudo integral de presos preventivos debe ser autorizado por:

- a) El Jefe de Servicios.
- b) El Director del Centro Penitenciario.
- c) El Juez o Tribunal de cuya autoridad dependa.
- d) El Juez de Vigilancia Penitenciaria.

51. De conformidad con el artículo 9 del Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y la protección de Seguridad Social de los sometidos a penas de trabajo en beneficio de la comunidad, la relación laboral especial penitenciaria podrá suspenderse por:

- a) Traslado del interno trabajador a otro establecimiento penitenciario por un período superior a dos meses.
- b) Terminación de la obra o servicio.
- c) Mutuo acuerdo de las partes.
- d) Renuncia del interno trabajador.

52. La suspensión de la ejecución de la pena de prisión permanente revisable, de acuerdo con el artículo 92.3 la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal tendrá una duración de:

- a) Cinco a diez años.
- b) Dos a cinco años.
- c) Tres a diez años.
- d) No cabe suspensión de la pena de prisión permanente revisable.

53. Según el artículo 155 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, para la concesión de permisos de salida extraordinarios será preceptivo:

- a) Que el penado haya extinguido la cuarta parte de la condena y no observe mala conducta.
- b) La autorización expresa del Juez de Vigilancia cuando se trate de internos clasificados en primer grado.
- c) La autorización del Centro Directivo cuando se trate de internos preventivos.
- d) Que el penado carezca de sanciones firmes sin cancelar.

54. El ingreso en Centros hospitalarios así como el traslado por razones sanitarias a otro Establecimiento penitenciario de los detenidos y presos, de acuerdo con el artículo 218 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario:

- a) Se acordará por el Director del Establecimiento previa autorización del Juez de Vigilancia Penitenciaria.
- b) Se comunicará a la Autoridad Judicial de que dependan o al Juez de Vigilancia Penitenciaria en el caso de los penados.
- c) Requiere la previa autorización de la Junta de Tratamiento.
- d) Deberá autorizarse previamente por la Autoridad Judicial cuando se trate de internos preventivos.

55. Según el artículo 108 del Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo, es falta muy grave:

- a) Introducir, hacer salir o poseer en el establecimiento objetos que se hallaren prohibidos por las normas de régimen interior.
- b) Instigar a otros reclusos a motines, planges o desórdenes colectivos, sin conseguir ser secundados por éstos.
- c) La divulgación de noticias o datos falsos, con la intención de menoscabar la buena marcha regimental del establecimiento.
- d) La sustracción de materiales o efectos del establecimiento o de las pertenencias de otras personas.

56. No es función del Juez de Vigilancia Penitenciaria, según el artículo 76 de la Ley Orgánica 1/1979, General Penitenciaria:

- a) Aprobar las propuestas que formulen los establecimientos sobre beneficios penitenciarios que puedan suponer acortamiento de la condena.
- b) Aprobar las sanciones de aislamiento en celda de duración superior a catorce días.
- c) Resolver por vía de recurso las reclamaciones que formulen los internos sobre sanciones disciplinarias.
- d) Autorizar los permisos de salida cuya duración sea superior a dos días de los internos clasificados en tercer grado.

57. Es condición necesaria para que el Juez o Tribunal pueda dejar en suspenso la ejecución de la pena, de acuerdo con el artículo 80.2 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal:

- a) Que el condenado haya delinquido por primera vez, incluyéndose a tal efecto las condenas por delitos imprudentes o por delitos leves.
- b) Que la pena o la suma de las penas impuestas no sea superior a cinco años, incluyendo en tal cómputo la derivada del impago de la multa.
- c) Que la pena o la suma de las impuestas no sea superior a dos años, incluyendo en tal cómputo la derivada del impago de la multa.
- d) Que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieren originado.

58. El artículo 90.5 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, establece que el plazo de suspensión de la ejecución del resto de la pena y de libertad condicional será de:

- a) Uno a cinco años.
- b) Uno a tres años.
- c) Tres a cinco años.
- d) No podrá ser inferior a la duración de la parte de pena pendiente de cumplimiento.

59. Según el artículo 24.1 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, para proceder a la liberación de los condenados a penas privativas de libertad será necesario:

- a) La aprobación de la libertad definitiva por el Juez de Vigilancia o del expediente de libertad condicional por el Centro Directivo.
- b) La aprobación de la libertad definitiva por el Tribunal sentenciador o del expediente de libertad condicional por el Juez de Vigilancia Penitenciaria.
- c) La aprobación de la libertad definitiva por el Juez de Vigilancia Penitenciaria o del expediente de libertad condicional por el Tribunal sentenciador.
- d) La expedición de mandamiento de libertad por la autoridad competente al vencimiento del plazo máximo de detención o transcurridas las setenta y dos horas siguientes al momento del ingreso.

60. Es función de los Juristas pertenecientes al Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, de acuerdo con el artículo 281 del Reglamento Penitenciario aprobado por el Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo:

- a) Ejecutar los métodos de tratamiento de naturaleza pedagógica.
- b) Adoptar provisionalmente las medidas indispensables para mantener el orden y buen funcionamiento de los servicios regimentales, dando cuenta de ellas al Director.
- c) Cuidar de la disciplina general del Establecimiento y de que se realicen los servicios en la forma establecida.
- d) Informar al Director de las instancias y recursos cursados o interpuestos por los reclusos con respecto a sus derechos y situaciones jurídicas.

61. La libertad condicional excepcional a penados primarios, condenados a su primera pena de prisión, exige según el artículo 90 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal:

- a) Que la condena impuesta sea inferior a dos años.
- b) Que haya extinguido la mitad de la condena.
- c) Que se encuentre clasificado en segundo grado.
- d) Que haya extinguido la cuarta parte de la condena.

62. Según el artículo 111.1 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, la responsabilidad civil derivada del delito comprende la restitución del bien, la cual:

- a) Tendrá lugar salvo que el bien se halle en poder de tercero.
- b) No podrá efectuarse si un tercero lo ha adquirido de buena fe.
- c) No podrá efectuarse si un tercero lo ha adquirido legalmente.
- d) Tendrá lugar aunque el bien se halle en poder de tercero y éste lo haya adquirido legalmente y de buena fe.

63. De acuerdo con el artículo 147 de la Ley 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, el delito de maltrato de obra es perseguible:

- a) De oficio.
- b) Previa denuncia o querrela del Ministerio Fiscal.
- c) Previa querrela de la persona agraviada o de su representante legal.
- d) Previa denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

64. Según el artículo 202 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, el particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviere en la misma contra la voluntad de su morador, será castigado con la pena de:

- a) Prisión de seis meses a dos años.
- b) Prisión de seis meses a un año y multa de seis a diez meses.
- c) Multa de uno a tres meses.
- d) Prisión de seis meses a tres años.

65. Serán competentes para el conocimiento y fallo de los juicios por delitos leves, de acuerdo con el artículo 14 del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal:

- a) El Juez de Primera Instancia.
- b) El Juez de lo Penal.
- c) La Audiencia Provincial.
- d) El Juez de Instrucción salvo que la competencia corresponda al Juez de Violencia sobre la Mujer.

66. Según el artículo 245 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, los recursos contra providencias, cuestiones incidentales, presupuestos procesales o nulidad del procedimiento, se resolverán por medio de:

- a) Sentencia.
- b) Auto.
- c) Decreto.
- d) Acuerdo.

67. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 757 del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Procedimiento Abreviado se aplicará al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a:

- a) 9 años.
- b) 6 años.
- c) 5 años.
- d) 3 años.

68. Según el artículo 17.4 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, el plazo máximo de detención policial es:

- a) 72 horas.
- b) 36 horas.
- c) Un menor no puede ser detenido.
- d) 24 horas.

69. De acuerdo con el artículo 37 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, el cumplimiento de la pena de localización permanente obliga al penado a permanecer en su domicilio o en lugar determinado fijado por:

- a) El Juez en Sentencia o posteriormente en auto motivado.
- b) El Juez en sentencia, exclusivamente.
- c) El juez de Vigilancia Penitenciaria en auto motivado, si se cumple en Centro Penitenciario.
- d) El Letrado de la Administración de Justicia, oído el penado.

70. El Tribunal del Jurado se compone, según el artículo 2 de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, de:

- a) 9 jurados, 2 suplentes y 1 Magistrado integrante de la Audiencia Provincial que lo presidirá.
- b) 6 jurados y 1 Magistrado de la Audiencia Provincial que lo presidirá.
- c) 9 jurados y 3 Magistrados de la Audiencia Provincial, uno de los cuales lo presidirá.
- d) El mismo número de jurados y Magistrados de la Audiencia Provincial, uno de los cuales lo presidirá.

71. A los efectos de determinar la ley penal aplicable en el tiempo, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, los delitos se consideran cometidos en el momento:

- a) En que se conoció que el sujeto ejecutó la acción u omitió el acto que estaba obligado a realizar.
- b) En que el sujeto ejecuta la acción ocurrida desde la publicación hasta que fue derogada la Ley.
- c) En que el sujeto ejecuta la acción u omite el acto que estaba obligado a realizar.
- d) En que el sujeto planea la acción u omite el acto que estaba obligado a realizar ocurridos, desde la publicación hasta que fue aprobada la Ley.

72. De conformidad con el artículo 21 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, es una circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal, la de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos:

- a) En cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral.
- b) En la fase de instrucción y con anterioridad al dictado de la sentencia.
- c) En cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al dictado de la sentencia.
- d) En cualquier momento posterior a la celebración del acto del juicio oral.

73. Conforme al artículo 11 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, la omisión se equipara a la acción cuando:

- a) Exista una genérica obligación legal o contractual de actuar.
- b) Exista una específica obligación legal o contractual de actuar.
- c) Exista una genérica o específica obligación de actuar.
- d) El omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión coetánea.

74. En relación a las medidas de seguridad y conforme al artículo 6 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, señale la afirmación correcta:

- a) No puede resultar más gravosa, pero sí de mayor duración que la pena abstractamente aplicable al hecho cometido.
- b) No puede ser de mayor duración pero si más gravosa que la pena abstractamente aplicable al hecho cometido.
- c) No puede exceder el límite de lo necesario para prevenir la peligrosidad del autor.
- d) No puede resultar más gravosa, ni de mayor duración que la pena determinada en la sentencia sobre el hecho cometido, ni exceder el límite de lo necesario a la valoración del Juez o Tribunal sentenciador en atención al resultado obtenido con su aplicación.

75. A los cómplices de un delito consumado, según el artículo 63 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, se les impondrá la pena:

- a) Establecida en la Ley a los autores de la infracción consumada.
- b) Inferior en uno o dos grados a la señalada por la Ley para el delito consumado.
- c) Inferior en grado a la fijada por la Ley para los autores del mismo delito.
- d) Inferior en uno o dos grados a la fijada por la Ley, en atención al peligro inherente y al grado de ejecución alcanzado.

76. En cuanto al delito de quebrantamiento de condena, el apartado 3 del artículo 468 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, establece que serán castigados con una pena de multa de seis a doce meses, los que inutilicen o perturben el funcionamiento normal de los dispositivos técnicos que hubieran sido dispuestos para:

- a) Controlar solamente el cumplimiento de penas o medidas cautelares.
- b) Controlar el cumplimiento de penas, medidas de seguridad o medidas cautelares, no los lleven consigo u omitan las medidas exigibles para mantener su correcto estado de funcionamiento.
- c) El seguimiento únicamente de las medidas cautelares acordadas, por el juez o Tribunal que conozca del asunto, así como en el caso de que no los lleven consigo.
- d) El seguimiento únicamente de medidas de seguridad acordadas, así como en el caso de que omitan las medidas exigibles para mantener su correcto estado de funcionamiento.

77. Respecto a la acusación y denuncia falsa, y simulación de delitos, regulados en los artículos 456 y siguientes de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, no podrá procederse contra el denunciante o acusador sino:

- a) Tras sentencia o auto de archivo, veinte días después de su dictado por el Juez o Tribunal que haya conocido de la infracción imputada.
- b) Tras sentencia firme o auto también firme, de sobreseimiento o archivo del Juez o Tribunal que haya conocido de la infracción imputada.
- c) Tras sentencia firme o auto, aunque éste no sea firme, de sobreseimiento o archivo del Juez o Tribunal que haya conocido de la infracción imputada.
- d) Tras auto de archivo o de apertura de juicio oral del Juez o Tribunal que haya conocido de la infracción imputada.

78. La legítima defensa, como causa de justificación, de conformidad con el artículo 20.5º de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal exige:

- a) Ausencia de provocación alguna por parte del defensor.
- b) Agresión ilegítima, reputándose ésta en caso de defensa de la morada o sus dependencias, la entrada indebida en aquélla o éstas.
- c) Que el ataque a los bienes constituya delito, aunque no los ponga en peligro de pérdida inminente.
- d) Que el defensor obre en cumplimiento de un deber.

79. De acuerdo con el artículo 21 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, es una circunstancia atenuante:

- a) La de haber procedido el culpable, en cualquier momento del procedimiento judicial, a confesar la infracción.
- b) La de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al dictado de la sentencia.
- c) La de obrar por causas o estímulos tan poderosos que le haya producido arrebató.
- d) La dilación ordinaria en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa.

80. En relación a la pena de prisión permanente, el penado por un delito no comprendido en el Capítulo VII del Título XXII del Libro II, del Código Penal, no podrá disfrutar de permisos de salida hasta que haya cumplido un mínimo de:

- a) Doce años de prisión.
- b) Diez años de prisión.
- c) Ocho años de prisión.
- d) Cinco años de prisión.

81. En materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, según lo previsto en el artículo 32.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad, se fijará por:

- a) El Ministerio de Hacienda y Función Pública.
- b) El Consejo de Ministros.
- c) El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
- d) El Tribunal de Cuentas.

82. De conformidad con el artículo 36.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el procedimiento para la exigencia de responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, tras el trámite de alegaciones y la práctica de las pruebas, constará de un trámite de audiencia a los interesados por un plazo de:

- a) Cinco días.
- b) Diez días.
- c) Quince días.
- d) Veinte días.

83. Conforme establece el artículo 8.5 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, el empresario deberá informar por escrito al trabajador, en los términos y plazos que se establezcan reglamentariamente, sobre los elementos esenciales del contrato y las principales condiciones de ejecución de la prestación laboral, siempre que tales elementos y condiciones no figuren en el contrato de trabajo formalizado por escrito:

- a) Cuando la relación laboral sea de duración superior a cuatro semanas.
- b) En todo caso, independientemente de la duración de la relación laboral.
- c) Cuando la relación laboral sea de duración superior a diez días.
- d) Cuando se formalice un contrato indefinido, no así en los contratos de duración determinada o temporales.

84. De acuerdo con el artículo 49.1.c) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en los supuestos de extinción del contrato por expiración del tiempo convenido, si el contrato de trabajo de duración determinada es superior a un año, la parte del contrato que formule la denuncia está obligada a notificar a la otra la terminación del mismo con una antelación mínima de:

- a) Diez días.
- b) Quince días.
- c) Veinte días.
- d) Treinta días.

85. De acuerdo con el artículo 30.1 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa, en el procedimiento de determinación del justo precio, la Administración expropiante habrá de aceptar o rechazar la valoración efectuada por los propietarios del objeto a expropiar en el plazo de:

- a) Diez días.
- b) Quince días.
- c) Veinte días.
- d) Treinta días.

86. Según lo previsto en el artículo 192 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los pliegos o el documento descriptivo de los contratos administrativos podrán prever penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido. Estas penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser:

- a) Superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato.
- b) Superiores al 20 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato.
- c) Superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA incluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato.
- d) Superiores al 20 por ciento del precio del contrato, IVA incluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato.

87. El Estatuto de la víctima del delito se regula en:

- a) La Ley 5/2015 de 25 de abril.
- b) La Ley 14/2015 de 27 de marzo.
- c) La Ley 4/2015 de 27 de abril.
- d) La Ley 4/2014, de 27 de marzo

88. Respecto de la delegación de competencias, regulada en el artículo 9 de Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señale la respuesta correcta:

- a) Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegado.
- b) En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a la adopción de disposiciones de carácter general.
- c) Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, salvo que no sean jerárquicamente dependientes, o en los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquéllas.
- d) Salvo autorización reglamentaria, no podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación.

89. Dentro del derecho a la negociación colectiva, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, indique cuál de las siguientes materias queda excluida de la obligatoriedad de la negociación:

- a) Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo y planes e instrumentos de planificación de recursos humanos.
- b) La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional.
- c) Los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la promoción interna.
- d) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios.

90. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, en relación con el contenido de los artículos 8 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

- a) Contra el acuerdo de avocación cabrá recurso, sin perjuicio de que pueda impugnarse en el que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento.
- b) La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o encomienda de gestión.
- c) La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio.
- d) La delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante y para su validez será necesaria su publicación.

91. Según el artículo 67 del IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, el personal laboral incluido dentro del ámbito subjetivo de este Convenio, siempre que la duración de la jornada diaria continuada sea de, al menos, cinco horas y media, tendrá derecho a una pausa de:

- a) Quince minutos durante la jornada de trabajo computable como de trabajo efectivo.
- b) Quince minutos durante la jornada de trabajo que no será computable como de trabajo efectivo.
- c) Treinta minutos durante la jornada de trabajo computable como de trabajo efectivo.
- d) Treinta minutos durante la jornada de trabajo que no será computable como de trabajo efectivo.

92. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso potestativo de reposición será de:

- a) Diez días.
- b) Quince días.
- c) Un mes.
- d) Tres meses.

93. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en sus actuaciones ante órganos colegiados, las partes:

- a) Podrán conferir su representación a un Procurador y deberán ser asistidas por Abogado.
- b) Deberán conferir su representación a un Procurador y ser asistidas por Abogado.
- c) Podrán conferir su representación a un Procurador y podrán ser asistidas, en su caso, por Abogado.
- d) Deberán conferir su representación a un Procurador y podrán ser asistidas, en su caso, por Abogado.

94. Conforme al artículo 40.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, la decisión de traslado deberá ser notificada por el empresario al trabajador, así como a sus representantes legales, con una antelación mínima a la fecha de su efectividad de:

- a) Diez días.
- b) Quince días.
- c) Veinte días.
- d) Treinta días.

95. De acuerdo con el artículo 82 de la Constitución Española, señale la respuesta correcta en relación con la elaboración de las Leyes:

- a) El Congreso podrá delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley.
- b) La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley ordinaria cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley de bases cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.
- c) La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito competencial a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos.
- d) Las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control.

96. Señale qué autor consideró al delincuente ya no como un subtipo humano, atávico y degenerado, sino como una criatura del medio en el que vive, producto de éste:

- a) Bernaldo de Quirós.
- b) Concepción Arenal.
- c) Rafael Salillas.
- d) Victoria Kent.

97. Por lo que se refiere a la forma de la sentencia en el proceso laboral ordinario, y de conformidad con el artículo 97.1 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, el juez o tribunal dictará sentencia en el plazo de:

- a) Tres días.
- b) Cinco días.
- c) Diez días.
- d) Quince días.

98. Conforme al artículo 123 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, el Juez o Tribunal planteará, mediante Auto, la cuestión de ilegalidad prevista en el artículo 27.1 dentro de:

- a) Los cinco días siguientes a que conste en las actuaciones la firmeza de la sentencia.
- b) Los diez días siguientes a que conste en las actuaciones la firmeza de la sentencia.
- c) Los quince días siguientes a que conste en las actuaciones la firmeza de la sentencia.
- d) Los veinte días siguientes a que conste en las actuaciones la firmeza de la sentencia.

99. Señale cuál de los siguientes autores no formó parte de la Escuela Clásica de la Criminología:

- a) Cesare Beccaria.
- b) Jeremy Bentham.
- c) Raffaele Garofalo.
- d) Francesco Carrara.

100. El artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula las condiciones generales para la práctica de notificaciones. Indique cuál de las siguientes respuestas no es correcta:

- a) Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.
- b) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará en todo caso por medios electrónicos.
- c) Con independencia de que la notificación se practique o no por medios electrónicos, las Administraciones Públicas enviarán un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica o en la dirección electrónica habilitada única, aunque si este aviso no se produce, ello no es obstáculo para que la notificación sea plenamente válida.
- d) Las Administraciones podrán practicar las notificaciones por medios no electrónicos cuando el interesado comparezca espontáneamente.

PREGUNTAS DE RESERVA

101R. De entre los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas recogidos en el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale el incorrecto:

- a) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico.
- b) A exigir, en todo caso, las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades.
- c) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración.
- d) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

102R. El plazo para el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado es de:

- a) Tres meses, desde la elevación.
- b) Cinco meses, a partir de la fecha en que se haya rendido.
- c) Cuatro meses, desde la aprobación.
- d) Seis meses, a partir de la fecha en que se haya rendido.

103R. Según lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, el régimen de prisión preventiva está presidido por el principio de:

- a) Reeducción y reinserción social.
- b) Presunción de inocencia.
- c) Seguridad jurídica.
- d) Interdicción de la arbitrariedad.